

CONVOCATORIA AL XXIII CONGRESO NACIONAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE CHILE.

El Comité Central del Partido Comunista de Chile convoca a la realización de nuestro XXIII Congreso Nacional, cuyo temario de discusión será el siguiente:

1. Línea política para el próximo periodo.
2. Programa del Partido.
3. Estatutos del Partido.
4. Elección de los organismos de dirección en las células, Comités Comunales, Comités Regionales y Comité Central.

El cronograma del Congreso será el siguiente:

- a) Desde el 1 de Julio hasta el 3 de Septiembre: Congresos de célula
- b) Desde el 4 de Septiembre hasta el 9 de Octubre: Congresos Comunales.
- c) Desde el 10 de Octubre hasta el 5 de Noviembre: Congresos Regionales.
- d) Viernes 1, Sábado 2 y Domingo 3 de Diciembre: Congreso Nacional.

Llamamos a desarrollar la más amplia discusión en todas las instancias del Partido, recogiendo la opinión del pueblo, sobre la base de la siguiente Convocatoria.

“A conquistar un gobierno democrático, nacional y de justicia social con unidad y lucha del pueblo”

1) Nuestro objetivo de hoy. El surgimiento de un nuevo momento político en el país ha creado condiciones favorables para generar una convergencia de fuerzas sociales y políticas, incluidos sectores de centro, que de distintas maneras y en distintos momentos, confluyan en el rechazo al neoliberalismo y se planteen un programa de profundas transformaciones democráticas y de justicia social para Chile.

Tras ese objetivo nos proponemos alcanzar un nuevo tipo de gobierno que supere al tipo de gobiernos neoliberales sustentados por la Concertación y la derecha. Un gobierno democrático, soberano y de justicia social, sustentado en una mayoría nacional activa y participativa. Esta es la meta principal para el período histórico que vivimos, y el camino para lograrlo es la unidad y la lucha de todo el pueblo.

2) Las características del momento político actual. El hecho político principal que marca este nuevo momento es la movilización creciente de distintos sectores sociales, lo cual se entrelaza con la formulación del paso táctico adoptado por el Partido en la segunda vuelta presidencial, cuyo contenido programático y proyección ha aportado significativamente en el desarrollo de los últimos acontecimientos.

Esta política se expresa ahora en una amplia convergencia social y política que coincide en terminar con el actual sistema electoral binominal, en realizar una reforma previsional para las mayorías nacionales y en reformar el sistema educativo.

En lo inmediato, mediante la unidad y la lucha, debemos elevar a primer plano la exigencia por ampliar los derechos de los trabajadores, destinar los elevados excedentes del cobre a políticas sociales, lograr verdad y justicia plenas para las violaciones a los derechos humanos, reconocer los derechos de los pueblos originarios y obtener respeto a la biodiversidad y al medio ambiente. Se trata de generar nuevos hechos, estimular nuevas demandas y movilizaciones, y vincular crecientemente al Partido y sus políticas con asuntos que involucran a grandes sectores sociales.

La reciente huelga estudiantil constituye la expresión más clara del nuevo cuadro político que despunta. Dicho movimiento tuvo caracteres de un estallido social, dada su masividad, amplitud, combinación de formas de lucha y profundidad de sus objetivos, rasgos que fue adquiriendo en un muy breve lapso de tiempo.

En el Informe al 15º Pleno del Comité Central de marzo de este año ya afirmamos: “Desde un tiempo a esta parte, teniendo como importante hito los resultados y efectos políticos de las recientes elecciones, despunta un nuevo momento político cuyo desarrollo y maduración dependen de la movilización social y de nuestro quehacer, y que permite desarrollar la lucha en mejores condiciones y crear correlaciones de fuerzas favorables en relación con importantes objetivos como el cambio del sistema electoral binominal. En concordancia con ello, la política del Partido ha ido enriqueciéndose”.

Chile ya no es el mismo de hace seis meses. Las fuerzas políticas y los movimientos sociales populares son hoy actores decisivos y han abierto grandes posibilidades de cuestionar y hacer trastabillar la hegemonía de los sectores neoliberales. Las batallas de los trabajadores del subcontrato de CODELCO contra la discriminación laboral, la lucha político-electoral de diciembre de 2005 que afianzó las posiciones del JPM, nuestra conducta en la segunda vuelta que permitió trastocar con un contenido democratizador lo que parecía una exclusiva disputa en el seno del bloque dominante, la constitución de un amplio entendimiento de partidos, movimientos, fuerzas sociales y personalidades por la democracia y la justicia social, la irrupción del movimiento estudiantil que mostró al país la crisis e inequidad de la educación chilena, son signos evidentes de una crisis más profunda en la que comienza a debatirse el modelo neoliberal, incapaz de dar respuestas a las demandas populares.

Un rasgo común une cada una de estas situaciones: el sello de ofensiva e iniciativa y el rechazo a seguir siendo tratados como hasta ahora por la elite neoliberal. Los sectores populares van entendiendo que no se trata solo de defender tal o cual reivindicación particular, sino que hay que apuntar a los pilares del modelo -heredados de la dictadura y profundizados por los gobiernos de la Concertación- tales como los sistemas electoral, previsional, educacional y laboral. Sus miradas comienzan a dirigirse a los llamados equilibrios macroeconómicos, el superávit fiscal, la entrega del cobre a la voracidad de los capitales extranjeros, el negocio de la salud y otros fundamentos del sistema.

Queda claro que no estamos ante un momento coyuntural, ya que son atacadas las contradicciones estructurales del sistema y han habido efectos directos sobre las estructuras de poder y las fuerzas que las sustentan, como lo evidencian la pérdida de control parcial en el accionar del gobierno, el surgimiento en su interior de contradicciones entre privatizadores y partidarios de una mayor intervención estatal, entre defensores de la restricción del gasto fiscal y quienes sostienen la necesidad de aumentar el gasto social, entre los que se amparan en medidas represivas y los que están por dialogar con la movilización social, entre los que están por avanzar en los temas valóricos y los que no. Con matices, en todos los partidos de la Concertación se detectan esos posicionamientos, habiendo ganado una mayor presencia quienes sustentan críticas a las políticas mercantilistas y antipopulares que se han aplicado hasta ahora.

Forman parte también de este momento político los esfuerzos denodados –dignos de una antología del oportunismo- de los sectores más reaccionarios, de la UDI y gran parte de RN, para ocultar su vinculación genética con la dictadura, los apresurados cambios de dirigentes y discursos. Dicen acoger las peticiones de las movilizaciones, pero en el fondo buscan reagrupar sus fuerzas para oponerse a cualquier cambio al sistema binominal, a la LOCE y demás baluartes del modelo.

El nuevo momento incluye el incremento de las provocaciones y el accionar más abierto de pequeños grupos con consignas maximalistas, que curiosamente encuentran gran eco en los medios de comunicación del sistema, los que no dudan en darles un falso papel protagónico para intentar deslegitimar la movilización social y justificar la violencia policial en su contra. Cobra relieve desplegar una lucha ideológica más decidida contra tales posiciones, ya que objetivamente, más allá de la voluntad de quienes las sostienen, son un obstáculo que retrasa e impide la unidad indispensable para derrotar al neoliberalismo.

Nuestro desafío entonces es apropiarnos de este nuevo momento político, pues eso nos permitirá determinar el carácter y el ritmo de las iniciativas a emprender para aislar a los sectores que representan al capital financiero transnacional y sus aliados y lograr así los avances de rango estratégico que nos trazamos para el presente período.

3) Avances en la lucha mundial de los pueblos. Han influido para llegar a este momento las conquistas democráticas y progresistas de las luchas populares en el mundo y particularmente en América Latina y el Caribe, que se abren paso ante el fracaso del sistema neoliberal y los efectos desastrosos de la globalización transnacional.

Los últimos años marcan la agresividad política, militar y económica del imperialismo norteamericano en diferentes partes del mundo. En Afganistán, Irak, Siria, Irán, Palestina, tratando de apoderarse del petróleo y otras riquezas del Medio Oriente y Asia Central. Presionando para subordinar a sus políticas a Rusia, China e India. Remilitarizando el Japón. Desatando el racismo antiárabe y el antiislamismo, usando el antiterrorismo como pantalla para el terrorismo, la carrera armamentista, la antidemocracia y el control de las personas y movimientos. En América Latina, intensifica y perfecciona su estrategia de agresión e intervención para detener las luchas populares y los procesos revolucionarios, como lo ilustra el llamado de Condoleezza Rice a constituir un frente común contra el gobierno de Hugo Chávez o

el endurecimiento del bloqueo contra Cuba. En apoyo de esta política busca el concurso de los gobiernos de Uribe en Colombia, ahora el de Alan García en Perú y continuará tratando de apoyarse en el gobierno de Chile. Todo ello exige elevar la solidaridad antiimperialista. El imperialismo depreda los recursos naturales y de la biodiversidad, negándose a firmar el tratado de Kioto, hace retroceder las condiciones de vida de la mayoría de los pueblos, se abren grandes bolsones de miseria y marginalidad, mientras el gasto militarista se incrementa y se generan nuevos focos de tensión extrema. En suma, esta política imperialista coloca al planeta y a la humanidad ante el riesgo de extinción.

Sin embargo, la descripción de estos procesos no puede llevarnos a ignorar su carácter contradictorio, es decir, el hecho que corresponden a una situación de debilitamiento de la hegemonía imperialista, en donde la tendencia principal es progresista y emancipatoria. En respuesta a esta política de agresión, se desarrollan avances importantes en la lucha de los pueblos.

La actual administración norteamericana sufre derrotas y pierde apoyos, aunque esta política imperial puede continuar más adelante con demócratas de derecha. Sus aliados europeos, como Aznar y Berlusconi, experimentan derrotas y dan paso a la salida de tropas de Irak, igual que Japón. Blair aumenta su decadencia. Francia y otros países buscan distanciarse. Hay un rechazo a las guerras preventivas y a los desastrosos efectos de la transnacionalización. En EE.UU. se desarrollan movilizaciones inéditas de latinos y de inmigrantes.

Se han logrado éxitos en la lucha contra el neoliberalismo y la ideología del capital imperialista, como el rechazo popular a la Constitución europea en Francia y Holanda, las luchas de los inmigrantes, el rechazo a la ley de flexibilización del trabajo de los jóvenes en Francia. Surge y se desarrolla una nueva izquierda alemana. Hay elementos nuevos en Palestina y en Israel.

China se afirma como potencia mundial con su variante de socialismo, aún cuando subsisten bolsones de pobreza y desigualdad y otros fenómenos negativos. Destacan su política de paz, su papel de motor mundial de la economía y de interdependencia con EE.UU. En Rusia se fortalece la tendencia a afirmar una política independiente y nacionalista frente a Estados Unidos.

Continúan desarrollándose los movimientos contra la globalización capitalista, se fortalecen el Foro Social Mundial y los Foros Sociales continentales, particularmente los de América Latina y Europa. Dentro de ellos crece la tendencia de los partidos de izquierda a coordinarse. La reciente Cumbre Mundial de Jefes de Estado de Europa y América Latina en Viena estuvo confrontada por una amplia Cumbre Alternativa en que fuerzas de izquierda europea y del Foro de Sao Paulo fueron núcleo principal.

Los partidos comunistas y marxistas crecen en diversos lugares, participan -con señales positivas, no exentas de contradicciones- en gobiernos de coalición en Sudáfrica, India, Italia, Venezuela, Uruguay, Brasil.

4) El giro a la izquierda en América Latina. En América Latina hay un giro a la izquierda que debemos buscar que influya aún más en el desarrollo del cuadro político en Chile.

De manera determinante, está la presencia de Cuba, que defiende y desarrolla con éxito el carácter socialista de su revolución, en medio del bloqueo que por ya 45 años ejerce Estados Unidos contra la Isla. La elaboración política siempre renovada que surge de su proceso, unida a la práctica internacionalista en aspectos claves como la salud y la educación, acrecientan su influencia entre los pueblos de América Latina y el mundo.

En Venezuela se fortalece la revolución bolivariana, basada en la incorporación creciente del protagonismo popular, lo que ha hecho posible derrotar los intentos desestabilizadores y golpistas del imperialismo y asumir un papel creciente en los nuevos procesos de integración latinoamericana.

Se sumó en su momento la llegada al gobierno del Brasil de una coalición de centro izquierda encabezada por Lula, obrero metalúrgico dirigente del PT, uno de los partidos fundadores del Foro de Sao Paulo. Ese gobierno, con su política, pesó decisivamente en el fracaso del ALCA y emprendió iniciativas de integración de nuevo tipo con Venezuela y otros países.

Recientemente estuvo la resonante victoria popular de Evo Morales en Bolivia, que nacionalizó los hidrocarburos y otras empresas, y se incorporó al ALBA, marcando el camino de un nuevo proceso de transformaciones antiimperialistas.

Está también la llegada al gobierno del Frente Amplio en Uruguay, desde donde inaugura políticas democráticas.

En Argentina, después de la catástrofe derivada de las políticas de Menem y De la Rúa, bajo el gobierno de Kirchner se ha producido una notoria recuperación económica, desacatando las exigencias del FMI, aplicando recortes a los acreedores privados de la Deuda Externa, estableciendo impuestos a los exportadores y favoreciendo una mejoría parcial de las remuneraciones, jubilaciones y ayudas sociales. Se ha avanzado en materia de DD.HH, contra la corrupción policial y judicial y en la subordinación de las FF.AA al poder democrático. El nuevo gobierno ha impulsado el comercio y la cooperación con Venezuela, negándose a suscribir el ALCA que promueve Bush.

En Colombia, pese a la reelección de Uribe, la izquierda se constituye por primera vez en la historia como la segunda fuerza política del país al obtener el Polo Democrático Alternativo el 22% de los votos. Mientras, prosigue la lucha de las FARC enfrentándose a la creciente intervención yanqui y a la política derechista del gobierno, buscando al mismo tiempo un acuerdo de paz.

Por su parte, aunque en Perú ganó las elecciones Alan García, el 45% obtenido por Ollanta Humala instala en ese país una fuerza política de carácter nacionalista progresista.

En otro plano, está la victoria de René Preval en Haití al derrotar con la movilización del pueblo en las calles el intento de fraude avalado por la Minusthad.

Un asunto central en el continente es la tendencia a una nueva forma de integración y solidaridad latinoamericana, en donde se ubica en primer lugar el ALBA, ejemplar proceso de integración entre Cuba, Venezuela y ahora Bolivia, cuyos acuerdos y perspectivas de cooperación

política, económica, financiera, cultural y en salud, se sitúan en abierta ruptura con el ALCA y el proceso de transnacionalización capitalista. Por su parte, otros gobiernos emprenden iniciativas de cooperación energética, financiera y en telecomunicaciones, expresando diversos grados de autonomía de Estados Unidos.

Amplios frentes y convergencias contra el neoliberalismo se confirman como la estrategia acertada, con tácticas que, basadas en la movilización popular, otorgan nuevas posibilidades a los procesos electorales, los que se transforman en un instrumento para llegar al gobierno y emprender medidas transformadoras, la principal de ellas, la recuperación de las riquezas naturales.

Se debe tener presente ante estos avances la posibilidad de intervenciones armadas y de desestabilización por parte de los Estados Unidos. La unidad de la izquierda y la unidad democrática a nivel continental son el instrumento para enfrentar tales situaciones.

Donde existen mayores posibilidades de consolidación de reformas progresistas es en aquellos países en que ha habido un auge de la movilización social, en que existe una Izquierda con unidad y capacidad política, capaz de terciar en las coyunturas, y cuando se produce un vínculo entre estos factores y una fractura político-institucional. Venezuela es la mayor aproximación a tal modelo, con el agregado del componente militar. Pero también lo es Bolivia.

Los avances en el proceso de acumulación exigen la unidad de los sectores de izquierda y revolucionarios con sectores del movimiento reformista y sectores nacionalistas dispuestos a romper la hegemonía neoliberal.

5) La contradicción principal del periodo. Un aspecto central en el desarrollo de nuestra política es establecer adecuadamente la contradicción principal del periodo, pues ello nos permite visualizar las fuerzas motrices, las alianzas y las formas de lucha que corresponden a este momento histórico concreto.

Entre 1973 y 1989 el principal obstáculo para las fuerzas democráticas populares fue la dictadura, y la contradicción principal era clara, “democracia o dictadura”. La política de rebelión popular de masas, que implicó el uso de diversas formas de lucha, permitió resolver esa contradicción principal desplazando a Pinochet del poder, pero el carácter pactado del fin de la dictadura tuvo como eje principal la exclusión de la escena política de quienes durante 17 años estuvimos al frente de la lucha de masas por la democracia, lo que quedó instituido en la Constitución pinochetista, con la cual ha seguido gobernando la Concertación.

Los gobiernos de la Concertación consolidaron y profundizaron el modelo neoliberal. La mayor parte de nuestras riquezas básicas y de empresas del Estado fueron privatizadas o entregadas a la voracidad de las transnacionales. Ello condujo a que hoy está prohibida la intervención del Estado para proteger al país de las continuas crisis del capitalismo globalizado, como aconteció entre 1998 y 2003, cuando aumentó la cesantía y se redujeron los ingresos del país. Nuevas crisis financieras se avecinan, con epicentro en EE.UU, a causa de su déficit fiscal y comercial. La apertura financiera internacional a que nos obligó el TLC con EE.UU deja a los chilenos más vulnerables y enfrentados a nuevos y graves peligros, como lo demuestra el impacto de la caída del dólar sobre los exportadores y los productores nacionales.

Consecuentemente con lo señalado, los congresos del Partido definieron que la contradicción principal del período es entre neoliberalismo y democracia, y resolvieron la Revolución Democrática como objetivo histórico estratégico cuya vigencia se mantiene.

6) Desnacionalización económica y desigualdad social. No necesitamos un simple crecimiento del PIB, sino un desarrollo cualitativo y sustentable, una elevación significativa del valor agregado de nuestras exportaciones y una reindustrialización basada en sectores de punta, como lo han hecho otros países emergentes. Chile requiere refinar y manufacturar todo el cobre que se extrae y también el molibdeno, el oro, el litio, la madera, el carbón y otros recursos marítimos y agropecuarios que poseemos en abundancia, junto con aprovechar la capacidad de nuestros profesionales y técnicos para exportar servicios. Las transnacionales no han demostrado ningún interés por invertir en estos rubros, solo quieren llevarse nuestras materias primas, sin ninguna elaboración. Es la iniciativa del Estado, con recursos financieros propios, y los privados que se quieran sumar, lo que puede abrir paso a nuevas fuentes de trabajo bien remuneradas.

En los últimos dos años se han acumulado cuantiosos superávits en las cuentas fiscales, fenómeno que se repetirá, acrecentado, el presente año y posiblemente el 2007. El año 2005 el superávit alcanzó a 5.403 millones de dólares, equivalente al 4,8% del PIB, esto es, una suma mayor a todo el presupuesto del Ministerio de Educación. En vez de utilizarlos, a lo menos en parte, en inversiones productivas o sociales que eleven nuestra capacidad y eficiencia económica, el Ministro de Hacienda deposita la mayor parte en bancos privados o los entrega al Banco Central (1.500 millones) para su colocación en los volátiles mercados financieros del exterior o bien los pone directamente en manos de las transnacionales, con serios riesgos de pérdidas, como ha ocurrido en los últimos meses. El mismo criterio se está empleando con los excedentes derivados del alto precio del cobre, que para este año se calculan en otros 10.000 millones de dólares. El Ministro Velasco actúa como un rentista que se conforma con vivir de los intereses, lujo que un país subdesarrollado con muchas carencias no puede darse. Estamos ante una oportunidad extraordinaria -aunque dure pocos años- que puede perderse si Chile no da ahora un salto en su desarrollo económico y social.

Lo que no es transitorio sino permanente, son las elevadas ganancias que se están llevando La Escondida, la Angloamerican, los Luksic y otras 17 compañías transnacionales, gracias a Pinochet y su ley minera. La ley Piñera, mantenida hasta hoy por la Concertación, en flagrante violación de la propia Constitución, entrega a las transnacionales, sin costo para ellas, ricos yacimientos de cobre, oro y otros metales asociados. La magnitud que están alcanzando esas ganancias lo grafica el hecho que una sola compañía -la Billiton, dueña de la mina Escondida- obtuvo el 2004 utilidades por 1.726 millones de dólares, lo que equivale al 94% de todo su patrimonio colocado en Chile durante quince años. Entretanto la desnacionalización de nuestra principal riqueza siguió avanzando al punto que ya en 2005, las grandes compañías privadas extrajeron el 63%, mientras Codelco produjo el 32,5% y la pequeña y mediana minería el 4,5% del total. Sin embargo, las transnacionales aportaron al Fisco 2.000 millones de dólares por impuestos, o sea, el 31%, mientras Codelco entregó 4.443 millones, o sea 69%, sin incluir el 10% para beneficio de las FF.AA. En otras palabras, por cada tonelada extraída por Codelco el estado chileno recibió 4,3 veces más dólares que el aporte de las privadas, a pesar de que éstas se llevan cerca de dos tercios de nuestras reservas.

Chile se encuentra en peligro de sufrir una grave crisis energética, derivada de la falta de previsión y planificación a largo plazo, de la privatización de nuestra industria eléctrica, del cierre apresurado de las minas de carbón y de contratos incumplidos por las transnacionales del gas argentino. El Estado debe asegurar el abastecimiento, desarrollando y diversificando tanto las fuentes nacionales como del exterior y orientando su uso más racional. Nuestras no despreciables reservas de carbón pueden ser aprovechadas con nuevas tecnologías. El potencial hidroeléctrico puede ser desarrollado evitando la destrucción del medio ambiente, sin el sistema de grandes represas, también la importación de gas natural licuado y regasificado. Hay que avanzar en energías alternativas para usos locales y domésticos como la solar, eólica, las mareas y el vapor de la tierra, también el uso del alcohol a partir de los vegetales. Debe impulsarse la cooperación regional y apoyar el proyecto del gasoducto continental desde Venezuela, Bolivia y Perú, de modo de distribuir los beneficios y costos equitativamente entre nuestros pueblos.

El libre mercado se opone al desarrollo social. Hay más de 800.000 indigentes, 3 millones de pobres, 500.000 cesantes crónicos, 700.000 familias en viviendas precarias, como lo reconocen cifras oficiales subestimadas. También aquí los gobiernos de la concertación y la derecha parlamentaria son culpables por los bajos índices de inversión pública en educación, lo que obliga a la mitad de las familias a elevados desembolsos en escuelas y universidades subvencionadas, convertidas en negocios privados, mientras la otra mitad es obligada a recurrir a la educación pública, que sufre de graves déficit en calidad que la deterioran día a día. La baja inversión pública en salud se traduce en dramáticas carencias que afectan a hospitales y policlínicos públicos, lo que a muchos obliga a enormes gastos por enfermedades que las ISAPRES y clínicas privadas transforman en lucrativos beneficios. Otro campo emblemático del modelo neoliberal que ha entrado en crisis es el sistema previsional. La mitad de los trabajadores afiliados a las AFP alcanzará sólo la pensión mínima, mientras otro alto número ni siquiera podrá percibir la mínima. Entretanto las AFP, que monopolizan el negocio, cobran elevadas comisiones y utilizan los ahorros de los trabajadores para participar en las ganancias de las grandes empresas.

El modelo se caracteriza por un aumento y consolidación de la inequidad. Mientras el 80% de los chilenos accede al 39% del ingreso total, el 20% más rico del país se queda con el 61% del total. Mientras en Suecia la desigualdad entre estos dos grupos es de 1 a 3,6, en Chile es de 1 a 18,5. A los antiguos multimillonarios como los Edwards, los Matte, los Yarur, los Ibáñez, se le han sumado los nuevos potentados que surgieron de la dictadura como los Yurasczek, Claro, Piñera, el grupo Penta, Ponce, Angellini, Saieh y los nuevos de la Concertación como los Luksic, Falabella, Navarro, Cardoen, Andraca, Sigdo Koppers y otros. En buena medida su poder económico proviene de las privatizaciones de las empresas públicas y de los créditos, subsidios y ventajas tributarias que les han concedido los gobiernos. Los magnates chilenos ya se codean con sus pares de los países más ricos, donde poseen fuertes inversiones. Los altos ejecutivos, relacionadores, asesores, abogados y consultores a su servicio gozan de ingresos superiores a sus colegas latinoamericanos e incluso a europeos, gracias a los bajísimos impuestos que pagan. En contraste, unos 10 millones de chilenos viven en hogares donde los adultos deben mantener a sus hijos con ingresos, cada uno, apenas superiores al ingreso mínimo. Con razón, “la gente no está satisfecha con el modelo económico, critica la distribución del ingreso, le pone una nota mediocre a los grandes empresarios y acusa que éstos están coludidos con los grupos políticos”, según la encuesta Collect publicada por El Mercurio.

La recuperación de nuestra soberanía económica es un objetivo de alta política que tiene que ver con la supervivencia de nuestro país como nación independiente y soberana, sustentada en primer lugar en un nuevo tipo de desarrollo nacional.

La idea de avanzar en nuevo proyecto de desarrollo nacional determina la urgencia de cambiar el actual sistema de educación, estructurado sobre la base de la denominada Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE -dictada un día antes que Pinochet dejara el poder- que coloca la llamada libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, contraponiéndose absolutamente a la concepción de la educación como un derecho humano fundamental cuyo acceso debe estar garantizado en iguales condiciones para toda persona, ya que la ha transformado en una mercancía cuya calidad depende básicamente de la capacidad económica de cada cual de acceder al “mercado educacional”, en el que es fundamental la participación de la iniciativa privada.

Después de más de 25 años de imposición de esta política, el Estado ha ido entregando progresivamente esta función primordial al afán de lucro de unos pocos, y el resultado ha sido la consagración y reproducción de la discriminación social, con una educación de calidad para una minoría de mayores recursos y otra muy inferior para las mayorías.

Su implementación se ha concretado principalmente mediante la municipalización y el financiamiento subvencionado de la educación básica y media. El objetivo ha sido facilitar el ahorro del gasto público en desmedro de una demanda social, lo que hoy día significa que a 700.000 alumnos de sectores populares se les obliga a pagar una subvención compartida. En la actualidad casi el 50% de los establecimientos educacionales del país son subvencionados y el Estado invierte un poco más del 4% del PIB, por bajo el 7% que es la media internacional, siendo el resto del gasto de cargo directo de la población, con lo que se llega al 7% que exhiben los índices oficiales. Conjuntamente con lo anterior, se ha desfinanciado las Universidades públicas, obligándolas a un autofinanciamiento que va en desmedro de su función social e impide el desarrollo del conocimiento en beneficio de las mayorías nacionales. Se impulsa la concentración del conocimiento científico en los centros de poder de las transnacionales, imponiendo a nuestros países una educación para una economía de sobreexplotación de recursos naturales de escaso valor agregado y sobre la base del trabajo precario.

La LOCE conlleva elementos propios de la doctrina de seguridad nacional, como la autonomía de los institutos educacionales castrenses, la presencia de estos en el Consejo Superior de la Educación y la separación de la formación educacional de los uniformados respecto del conjunto de la sociedad.

Por su parte, el sistema municipalizado fue una de las principales “modernizaciones” de la dictadura de Pinochet. Emergió proclamando una descentralización que nunca fue tal y sus debilidades y contradicciones se han seguido profundizando. La actual institucionalidad municipal se expresa en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y durante los últimos 16 años las modificaciones que se han realizado han sido principalmente de carácter electoral, pero no han alterado la institucionalidad antidemocrática. Este es un sistema que ha hecho crisis y está quebrado, por tanto requiere una urgente reforma.

La municipalización, que significó el traspaso a las municipalidades de funciones esenciales como la salud y la educación, que estaban centralizadas, se impuso a sangre y fuego y con la oposición de los diversos sectores involucrados. Hoy tenemos un sistema de educación y salud administrado por las Corporaciones Municipales, o las Direcciones de Educación y Salud, que ha demostrado su fracaso e ineficacia, ya que la gran mayoría de estas Corporaciones están quebradas, con deudas impagables y déficit cuantiosos.

Más allá de las diversas posturas frente al sistema municipalizado, nadie discute la necesidad de reformarlo radicalmente.

7) El gobierno Bachelet. Este nuevo gobierno encabezado por Michelle Bachelet no dejará de ser un gobierno neoliberal, al que seguiremos siendo oposición. Lo que ha ocurrido es que, ante la disyuntiva de mantener incólume un modelo que empieza a mostrar fisuras no menores o realizar ciertos cambios para su permanencia hacia el futuro, y habida cuenta del descontento social creciente, el oportunismo de la derecha que usa tal descontento, y la expresión crítica y propositiva de la izquierda, la Concertación se ha visto obligada a un reposicionamiento para su proyección en el tiempo. Esto es lo que explica que, por primera vez, se manifieste una cierta disposición a reconocer la necesidad de cambios y el legítimo papel de los movimientos sociales y fuerzas políticas excluidas.

8) Legitimidad de la movilización. Autodefensa y FF.AA. Sin embargo, se mantienen políticas represivas criminalizando la protesta social. Frente a esto, no permitiremos que se usen subterfugios para deslegitimar la lucha por la democracia y la justicia social, como se quiso hacer después del 1º de Mayo haciendo pié en las provocaciones realizadas en la masiva concentración de la CUT o al pretender responsabilizar a nuestro Partido como causante de la violencia y manipulador del conflicto estudiantil.

Como se demostró el 21 de mayo en Valparaíso, ocasión en que resistimos la agresión de Carabineros a la Dirección del Partido y a los dirigentes sociales, la violencia se suscita en gran medida por la represión indiscriminada y abusiva de las fuerzas policiales. Eso es tan evidente que la forma como se reprimió a estudiantes y a periodistas obligó al gobierno a tomar medidas con determinados jefes de carabineros. Y en cuanto a la pretendida manipulación del conflicto estudiantil, apoyamos las demandas de los estudiantes pero hemos sido respetuosos de sus decisiones y de su movimiento, sin oportunismo o instrumentalización política, porque como lo hemos dicho, los dirigentes sociales que militan en nuestro partido se deben a su organización social. En virtud de ello los jóvenes comunistas han actuado en el conflicto de manera responsable, unitaria y decidida.

La legitimación de la movilización social es una tarea del período, un derecho democrático y democratizador, pues la actual ofensiva para criminalizar y reprimir las movilizaciones sociales persigue detener el creciente protagonismo que están desarrollando los estudiantes, mapuches, trabajadores y otros sectores populares para obtener satisfacción a sus demandas.

Los comunistas, por la trágica experiencia vivida por el pueblo chileno, hemos aprendido que debemos estar dispuestos a usar todas las formas de lucha, pero también debe quedar muy

claro que hay momentos y momentos para cada una de ellas. Las provocaciones y las acciones de violencia sin sentido y razón política, desvinculadas del movimiento real de masas, frenan e impiden la masividad de las luchas, que hoy es lo principal. Ello no descarta la autodefensa si es que se persiste en someter al pueblo a la agresión o las provocaciones, y a los ataques de grupos fascistas neonazis que han emergido en el último tiempo. Esas formas de lucha y de autodefensa deben generar las mejores condiciones para que los movimientos y las protestas callejeras se expresen, masiva y multitudinariamente.

En Abril de este año se cumplieron 30 años del Inicio de la Tarea, y se cumplirán en Agosto y en Septiembre 20 años de la internación de armas por Carrizal y del ataque a la caravana armada del tirano. A propósito de ello nos reunimos con más de un centenar de ex oficiales formados en Cuba y otros países que solidarizaron con nuestra causa, oficiales revolucionarios internacionalistas como lo fueron en su momento San Martín, O'Higgins, Bolívar, Manuel Rodríguez y otros héroes de nuestra independencia. Luchando en otros procesos 19 de ellos perdieron la vida en combate. Diez han sido repatriados. En Chile contribuyeron a llevar a la práctica nuestra política de rebelión popular contra la dictadura. Muchos sufrieron la cárcel, varios aún son perseguidos, otros viven en el extranjero producto de condenas de expatriación, un número importante perdió la vida en alevosos golpes propinados por las fuerzas represivas. Los que están en Chile se han integrado a la vida civil.

El Partido Comunista reconoce el papel de cada uno de ellos en un nombre: Raúl Pellegrini, primer jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, conformado en su gran mayoría por militantes del Partido Comunista. El rodriguismo fue una adquisición del Partido Comunista, que hoy se prolonga y permanece en cada uno de nosotros.

Estas conmemoraciones han contribuido a reconocer de manera más completa el rol jugado por el Partido en la incorporación de las formas de autodefensa de masas y de lucha armada al acervo histórico del movimiento popular chileno y, junto con ello, han puesto de relieve la necesidad de implementar con mayor decisión la política militar del Partido en este periodo, pues al avanzar en la consecución de los objetivos políticos planteados se irá agudizando la confrontación política y dilucidándose cual será la forma de desenvolvimiento de la lucha revolucionaria. Debemos estar preparados política e ideológicamente para emprender formas de lucha distintas si así lo requieren la circunstancias.

Asimismo, debemos dar continuidad y carácter sistemático a las iniciativas dirigidas hacia las FF.AA. y a Carabineros. Si bien es cierto las FF.AA. chilenas aún no están democratizadas ni se han desligado de la defensa de intereses reaccionarios ni de la doctrina de seguridad nacional, y muchos responsables de violaciones a los derechos humanos permanecen impunes, no es fatal que las FF.AA. jueguen siempre un papel de contención de cualquier proyecto popular alternativo al neoliberalismo. La experiencia de diversos procesos revolucionarios y progresistas en América Latina y nuestra propia experiencia, muestran que las instituciones militares no son impermeables a las ideas de cambio social. En ocasiones, la fuerza del movimiento popular ha logrado que jueguen, en su totalidad o sectores importantes de ellas, un papel distinto, favorable a los intereses populares.

9) Los trabajadores, sujeto principal de la convergencia. Para hacer avanzar nuestro objetivo estratégico nos proponemos en los próximos años acumular fuerzas para alcanzar un nuevo tipo de gobierno que realice reformas profundas de carácter democrático y de justicia social, abriendo la posibilidad de unir todas las fuerzas políticas y sociales consecuentemente democráticas, de la izquierda y del centro, tras ese objetivo.

No existe una contradicción entre los objetivos del período y nuestra concepción socialista de la sociedad.

El período que vivimos nos demanda avanzar con las mayorías nacionales, que se ven afectadas por la dominación neoliberal. Sin embargo, el sujeto principal que genera las condiciones para la unidad que buscamos, son los trabajadores.

Alianzas más estables, sólidas y amplias sólo se abrirán camino con un movimiento de trabajadores que levante un programa democrático nacional y sea capaz de convocar a este proyecto emancipador a los micro, pequeños y medianos empresarios que están afectados por el modelo, y que serán favorecidos por un gobierno nacional, de justicia social e independiente del imperialismo y del capital transnacional financiero.

Eso significa superar expresiones que despiertan, estallan y mueren, y avanzar en la conformación de movimientos sociales reales en la juventud, las mujeres, la cultura, los pobladores, los mapuches, la defensa del medio ambiente.

Un papel destacado en la movilización social tienen los pueblos originarios y en especial la lucha que ha dado el pueblo mapuche por liberar a sus dirigentes encarcelados injustamente. La heroica huelga de hambre de los presos políticos acusados por la ley antiterrorista ha puesto en evidencia la ilegitimidad de su aplicación. Nos comprometemos a seguir luchando por la libertad de todos los presos políticos. El reconocimiento de la autonomía y derechos fundamentales del pueblo mapuche, depende de su unidad de acción en torno a su demanda histórica. Un rol importante en este sentido es el que debe cumplir la Asamblea Mapuche de Izquierda, la que debemos fortalecer como un movimiento político social al interior del pueblo mapuche.

Chile mantiene su deuda con las mujeres y los sectores más discriminados. Los últimos años han significado un tremendo esfuerzo por incluir temas de género en la agenda político social en torno a problemas como la pobreza, cesantía, violencia contra las mujeres, protección social, discriminación, etc. Nuestro país muestra preocupantes debilidades en esos planos. La superación de la discriminación hacia la mujer implica un profundo cambio cultural y social, que va mucho más allá de la acción del estado, sin embargo el rol que éste juegue lo convierte en un agente acelerador o retardatario de los cambios que se requieren.

Aunque el movimiento campesino está muy disperso, se están comenzando a rearticular luchas de campesinos y trabajadores del campo y a generar las condiciones para que emerja un movimiento campesino unido que, en conjunto con todas las organizaciones rurales, luchen por el derecho a trabajo digno, tierra, aguas, créditos, capacitación, participación y para enfrentar los efectos negativos de los TLC, la muerte de las bandas de precios y la necesidad de mantener una agricultura tradicional de cultivos varios, permitiendo que Chile logre su sobe-

ranía alimentaria. Paralelamente, camine a fortalecer la alianza que se impulsa desde la CUT para producir cambios en nuestro país.

Los entendimientos se construyen con todas las fuerzas que tienen un objetivo estratégico común. La clave en el proceso unitario es que las alianzas se produzcan y se generen en el trabajo de masas, en el proceso de construcción de este amplio espacio que significa la convergencia social y política. Nuestras alianzas deben considerar posibilidades de avances, a lo menos en tres niveles:

- a) Avances en la convergencia social y política.
- b) Entendimientos tácticos.
- c) Programa democrático.

Es en esta perspectiva que nos planteamos incidir en el centro para provocar que sectores de él se desplacen y participen de alianzas y acuerdos por un programa democrático de profundas transformaciones sociales y políticas hasta conquistar un gobierno de nuevo tipo. Será un proceso complejo, difícil, con tensiones, pero que debemos enfrentar para terminar definitivamente con una de las claves del poder en el que se ha sustentado esta mal llamada «transición hacia la democracia»: la «democracia de los acuerdos», «de los consensos», que se fundamenta en los entendimientos entre la derecha y el centro.

10) Unidad antineoliberal y unidad de la izquierda. La izquierda hoy engloba una pluralidad de fuerzas, partidos, movimientos, tendencias, personalidades, que se plantea llevar a cabo profundas transformaciones democráticas al modelo de dominación del capital financiero transnacional, sobre la base de la más amplia unidad de todo el pueblo afectado por el sistema neoliberal y de una plataforma democrática, nacional y latinoamericanista. Su desafío es incidir, a través de la movilización social, para conquistar un gobierno de mayorías nacionales, en que la hegemonía democrática y popular permita sustentar los avances y las tareas de la revolución democrática. Debe también, en base a una planificación de su inserción territorial nacional, proyectarse con vistas a las batallas político-electorales de 2008 y 2009.

Hay grupos que tras una presunta radicalidad propugnan la espontaneidad como táctica y el socialismo como objetivo estratégico inmediato, cuya única consecuencia real sólo puede ser el aislamiento de las fuerzas de izquierda respecto de sectores democráticos de inspiración antineoliberal. En lo social, ponen en duda el papel del movimiento sindical y fomentan su fragmentación, oponiendo pequeños grupos de trabajadores al conjunto del sindicalismo organizado y atrincherándose en reductos poco significativos y marginales. De corte anarquista, impugnan la centralidad de la lucha política y el rol de los partidos, rechazando la construcción de amplios referentes unitarios contrarios al modelo neoliberal, incentivando la dispersión con el pretexto de preservar la identidad de los sectores revolucionarios. Todo ello condimentado con discursos de alto contenido anticomunista.

Estos fenómenos han existido siempre en la historia del movimiento popular. Lo diferente es que hoy expresan ideológicamente a estamentos sociales gravemente desestructurados por el modelo y que carecen de una identidad y cultura política popular.

Rechazamos toda visión antagónica de la unidad de la izquierda y la unidad antineoliberal. La izquierda no se construye al margen de la unidad más amplia y estratégica que determina el período y su carácter antineoliberal, son procesos que se retroalimentan. La unidad antisistémica que requerimos no será posible si no existe una izquierda que la impulse y potencie y por otra parte no será posible una efectiva unidad de la izquierda sino en medio de la formación de la amplia alianza que buscamos.

Con estos asuntos de la táctica y de la forma de abrirle paso a la unidad amplia del pueblo está vinculada la crisis generada en el Juntos Podemos Más. Debemos sacar enseñanzas de ella para superarla y rearticular la izquierda en esta nueva fase.

11) Las tareas de un nuevo gobierno democrático. A un gobierno democrático y nacional le corresponde realizar cambios en beneficio del pueblo, para lo cual debe:

a) Efectuar modificaciones institucionales que establezcan un Estado democrático y descentralizado, que sea determinante en el desarrollo nacional, regional y comunal. Lo primero será plebiscitar una nueva Constitución y reformar la actual Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para instalar gobiernos comunales democráticos y participativos.

b) Recuperar soberanía sobre nuestro cobre, invirtiendo los elevados excedentes derivados del alza de su precio en incorporar valor agregado a nuestra economía, terminando con la ley reservada del cobre, imponiendo un royalty y una tributación adecuada a las transnacionales y caminando hacia su renacionalización.

c) Impulsar medidas urgentes de inversión social y de construcción de una sólida base para la creación de nuevas fuentes de empleo, con un nuevo trato hacia las PYMES y una rigurosa defensa del medio ambiente.

d) Desarrollar una política de integración y unidad latinoamericana, con independencia de los Estados Unidos y los bloques transnacionales, que nos transforme en la gran región del mundo que podemos ser, utilizando nuestras inmensas riquezas a favor de la democracia y la justicia social.

e) Desarrollar políticas que transformen la salud, educación, vivienda, previsión social, calidad de vida, en derechos accesibles a todos. El Estado debe establecer un conjunto de condiciones materiales e intelectuales para hacer efectiva la igualdad de oportunidades en materia educacional, poniendo fin al actual sistema de financiamiento que sólo reproduce la exclusión social y económica. Se precisa una nueva institucionalidad que fortalezca la educación pública dentro de un sistema nacional y plural de educación, que combine adecuadamente una gestión descentralizada con el necesario rol del gobierno central, que integre la participación decisoria de la comunidad, el pleno respeto a la profesión docente, a los derechos de los estudiantes y de los padres y apoderados.

f) Promover medidas de reinserción de las FF.AA. y Carabineros en la sociedad chilena a partir de una concepción democrática de doctrina militar.

g) Establecer un nuevo código laboral e implementar medidas que reduzcan la desigualdad social, entre ellas una reforma tributaria redistributiva.

h) Reconocer constitucionalmente al pueblo mapuche y demás pueblos originarios y ratificar en el Parlamento el convenio 169 de la OIT.

i) Desarrollar una política para la plena vigencia de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales garantizados en los tratados internacionales, por la verdad total, la justicia plena y reparación frente a las graves violaciones a los derechos humanos, por la ratificación de los tratados internacionales que se encuentran pendientes y por anular el decreto ley de amnistía.

j) Terminar con cualquiera forma de discriminación de edad, sexo, estirpe o condición física, política o social, y propiciar que sean reconocidos plenamente los derechos económicos, sociales, culturales y reproductivos de la mujer. Estamos por la plena igualdad de los jóvenes y reconocimiento y respeto de sus derechos, por la plena aplicación de la Convención de los derechos del niño y terminar con toda forma de explotación y abuso infantil, por una política de Estado hacia el adulto mayor que garantice una vejez digna.

k) Crear una nueva política cultural y recreacional de carácter popular y de incentivo y financiamiento regular a la actividad artística y deportiva.

12) El sistema binominal y la reforma electoral. Es necesario relevar aún más la campaña política por terminar con el sistema electoral binominal, que ha sido un freno principal para la acumulación de fuerzas del movimiento popular pues resta fuerza y presencia a la lucha social, cuyos actores aún no nos perciben como un referente político social, con visión de gobierno y de poder.

Poner fin al binominalismo es terminar con un mecanismo de exclusión política del capitalismo neoliberal hacia el mundo obrero y popular, es una condición para posibilitar la síntesis de las luchas sociales con la política, como ha sido en la gran mayoría de los países latinoamericanos en donde los movimientos y luchas sociales han tenido su correlato exitoso en el plano político.

Hoy confluyen condiciones favorables para lograr el objetivo. Hay sectores políticos de izquierda, de la Concertación y hasta de la derecha, que se han pronunciado explícitamente por ello. Está el compromiso público de Michelle Bachelet. Sin embargo, es la movilización y el protagonismo del pueblo el llamado a cambiar la situación, rechazando cualquier asomo de contubernio que trate de burlar la voluntad popular.

El Partido Comunista, en contados períodos de la historia de Chile, desde Luis Emilio Recabarren, su primer Diputado, estuvo fuera del Parlamento. La historia de nuestro país señala como experiencia similar en 1958 la creación del Bloque de Saneamiento Democrático, amplio espectro de fuerzas políticas que consiguió la derogación de la llamada Ley de Defensa de la Democracia, la Ley Maldita, dictada en 1949 por Gabriel González Videla para perseguir a los comunistas.

Frente a la propuesta de reforma electoral del gobierno, valoramos que se consideren los principios básicos planteados por el PC para fundar el cambio del sistema electoral y que se plantee elevar el número de Diputados a 150 y de Senadores a 50, redefiniendo los actuales distritos. Pero todavía persiste una concepción de exclusión que opera a favor de los bloques actuales, pues de acuerdo a la propuesta, el JPM, que alcanzó un 7,4% de los votos en las últimas elecciones, solo obtendría 3 diputados, es decir, solo un 2% de los parlamentarios, en circunstancias que debiera tener al menos 9. Se elimina la prohibición de ser candidatos a los dirigentes sindicales y vecinales, pero insistimos que es necesario avanzar en la inscripción automática de los ciudadanos, en otorgar el derecho a voto a los chilenos residentes en el exterior, en la eliminación de la restricción que significa la exigencia del 4º Medio para ser candidato, en reducir la edad necesaria para ser Diputado a 18 años cumplidos.

De persistir la oposición de los sectores más reaccionarios de la derecha a cambiar el sistema y a mantener una verdadera dictadura parlamentaria, el gobierno debiera convocar a un plebiscito nacional para que se exprese la voluntad popular. Ello enfatiza la urgencia de elevar la campaña de movilización, que incluye la recolección de firmas, para exigir un plebiscito destinado al cambio del sistema binominal.

13) Evaluación de nuestras políticas desde el XXIII Congreso. Al enfrentar este nuevo Congreso debemos evaluar el desarrollo de nuestra política en estos cuatro años.

En el XXII Congreso resolvimos “la necesidad de un viraje en el enfoque político y la implementación de nuestra línea... un desplazamiento de todos nuestros esfuerzos hacia la base social, hacia los trabajadores, para construir en todos los sectores movimientos de masas resueltos a intensificar sus luchas por sus derechos y aspiraciones enfrentando de mil formas al sistema. Esto nos demanda actuar hacia fuera, hacia el pueblo, cotidiana y activamente y no sólo en los períodos electorales, como nos ha ocurrido en gran medida durante estos años. Este viraje de todos nuestros esfuerzos hacia los trabajadores se debe expresar, en primer lugar, en un conocimiento de la realidad comunal y regional, traducido en planes concretos, definición de misiones a células y militantes, destinación de cuadros, propaganda, educación dirigida hacia los trabajadores”.

Nuestra conclusión es que no hemos logrado realizar plenamente el viraje que nos propusimos hace cuatro años, aunque queda claro que hemos creado condiciones favorables para completarlo hoy de acuerdo a las exigencias del nuevo momento político.

El 2003 abrió una nueva etapa de lucha a partir del exitoso Paro Nacional convocado por la CUT el 13 de Agosto, de la plataforma y resoluciones del Congreso Refundacional de la Central, de las jornadas de conmemoración de los 30 años de la Unidad Popular. Tuvimos algunos avances en la afiliación de nuevos sindicatos a la CUT, en el trabajo hacia los sectores de mayor concentración proletaria y hacia el comercio, los servicios, los forestales, los salmoneros y el área del cobre.

Al interior de la CUT se fueron logrando acuerdos entre distintos sectores políticos hasta arribar a un acuerdo mayor en torno a una plataforma antineoliberal, lo que ha permitido rescatar en gran parte su carácter de clase y poner al centro la movilización social en función

de los intereses de los trabajadores y de los cambios democráticos. Pero se requiere ampliar y profundizar la unidad de todos los sectores que tienen presencia en la Central, pues la unidad del movimiento sindical organizado es esencial para que los trabajadores puedan jugar un papel protagónico en la lucha por los cambios y para que la CUT asuma plenamente su lugar en la convergencia social y política por más democracia y justicia social.

Emergió en este periodo un movimiento de fuerzas de izquierda, articulado primero en el Juntos Podemos, que obtuvo un 9,14% de la votación en las elecciones municipales y aumentó significativamente los alcaldes y concejales electos, constituyéndose en un hito decisivo para el ulterior desarrollo del Juntos Podemos Más.

El Podemos realizó su Primera Convención Programática, a la cual asistieron más de 400 delegados de todo Chile, y el conjunto del Partido asumió la tarea de ser protagonistas y constructores principales de este instrumento en todas las comunas, regiones y frentes del país.

Más tarde se incorporaron nuevos sectores y se constituyó el JPM, acordándose en la Asamblea Nacional del 5 de Junio del 2005 un programa común de gobierno, una lista parlamentaria unitaria y una sola candidatura presidencial para las recientes elecciones. En esa campaña electoral se instalaron en el debate nacional importantes temas como la concentración económica y la desigualdad social, la crisis del sistema previsional, el perfil de ladrón y criminal del dictador Pinochet, la ilegitimidad del sistema electoral binominal, el carácter agresivo y criminal de la política de Bush, la demanda por salarios justos y pensiones dignas, así como la urgente necesidad de resolver las profundas carencias en materia de salud y educación. Es muy valorable el 7,4% nacional obtenido en las elecciones parlamentarias, junto con las votaciones superiores a ese promedio en 10 distritos, y de 10% a 21% en 4 distritos, pues fueron logrados a pesar del binominalismo, sin tener parlamentarios ni puestos de gobierno, con menos recursos y menos acceso a los medios de comunicación, y luchando contra la percepción de que, dado el sistema electoral binominal, no resultaríamos electos cualquiera fuera nuestro esfuerzo. Quedó de manifiesto ante el país la injusticia del sistema electoral binominal.

Por otra parte fue muy significativo el conjunto de actividades realizadas en ocasión del Centenario del Natalicio de Pablo Neruda, así como la protesta nacional y la marcha en Santiago de miles de personas que expresaron su rechazo al neoliberalismo y a Bush en ocasión del Encuentro de la APEC.

Una constante en este período ha sido la lucha por la verdad, la justicia y contra el punto final. La defensa de los derechos humanos seguirá siendo un componente principal de nuestra política. Los aspectos que él aborda, como la verdad, la justicia, la reparación y la memoria son tareas aun pendientes. La verdad está inconclusa, como lo revelan los dramáticos resultados de la identificación de las víctimas del patio 29, y los cientos de detenidos desaparecidos y ejecutados cuyos cuerpos aun no han sido encontrados. En la justicia ha habido avances significativos, sin embargo la impunidad sigue siendo una realidad para un núcleo considerable de violadores a los derechos humanos. Es necesario destacar el importante aporte, con el carácter de justicia hecha desde las masas, que desde hace 6 años desarrolla la Comisión Funa desenmascarando criminales impunes. En cuanto a la reparación, si bien se ha logrado reparar a un número importante de víctimas ésta aun resulta mezquina e insuficiente para la

gravedad de las violaciones que se cometieron y las consecuencias que ellas tuvieron. La Ley Valech requiere importantes modificaciones para incorporar no solo a nuevas víctimas sino ampliar a los beneficiarios y terminar con el secreto que fomenta la impunidad. Los exonerados llevan años esperando una respuesta que no llega. La mantención de la lucha por los derechos humanos requiere de la unidad del movimiento de derechos humanos y de las diversas organizaciones de víctimas y familiares que lo componen. Tenemos que hacer más esfuerzos por la unidad en el caso de los exonerados políticos.

Han estado también en este periodo las movilizaciones de los deudores habitacionales, la acción ciudadana contra Celco, Pascua Lama y La Farfana, el repudio a la tragedia de Antuco, las luchas del pueblo mapuche, los masivos actos realizados recientemente para el 94º Aniversario del Partido en el Caupolicán, en Valparaíso, Rancagua, San Felipe, Los Andes y otros lugares del país.

Los avances señalados son importantes si consideramos que el proceso de acumulación de fuerzas en nuestro país evolucionó más lentamente que en otros países de América Latina, debido al carácter temprano y la profundidad con que penetró el neoliberalismo, conllevando un retroceso más marcado en la conciencia social del pueblo.

Sin embargo, este Congreso debe abordar, muy autocríticamente, el trabajo realizado en relación al viraje planteado en el anterior Congreso. Tenemos que preguntarnos si hemos reflejado esta orientación principal en el quehacer cotidiano, en los planes y tareas políticas. En general, lo logrado es muy insuficiente, por tanto el viraje es un objetivo que sigue plenamente vigente. Necesitamos avanzar mucho más en dar contenido político y organizar a la gran masa de proletarios de nuestro país. Nos falta mucho más en el desarrollo del movimiento sindical, en la sindicalización, en las afiliaciones a la CUT. Esto último es aún más imperativo pues en Agosto de 2008 se realizarán elecciones universales de la CUT y de importantes gremios, federaciones y confederaciones sindicales.

14) Un partido de masas para la unidad y luchas populares. En el informe al XXII Congreso se señaló que “...necesitamos un Partido grande, sólido en sus concepciones políticas, que incida en las masas, que realice su aprendizaje y conduzca desde las masas. Eso es lo que nos da la medida de nuestras necesidades de crecimiento, que son de cantidad y de calidad. Necesitamos crecer para luchar e influir con más fuerza, y en más lugares. El crecimiento del partido no se puede medir sólo en números ni sólo en votos, sino que en su capacidad para desarrollar nuestra política en el movimiento popular.”

La existencia y vigencia de un partido revolucionario es parte integral de las luchas de un pueblo, tal como lo acreditan los reiterados intentos de las clases dominantes por destruir nuestro partido e impedir su acción, ya sea recurriendo al terrorismo de estado, como sucedió bajo la dictadura fascista, o utilizando la proscripción legal y la represión en el gobierno del traidor González Videla, o recurriendo a formas más sutiles como la cooptación y la exclusión durante esta eterna transición post dictadura.

Todos esos difíciles momentos fueron superados sobre la base de la línea y conducta política de los comunistas y por nuestro enraizamiento en el pueblo. Este carácter popular, que se

desarrolla desde que irrumpe el partido en las luchas del proletariado de comienzos del siglo XX y que en las décadas siguientes se acrecienta con la incorporación del campesinado, intelectuales, capas medias, estudiantes y pobladores, es el que debemos desarrollar hoy. Tenemos un vasto campo en el inmenso contingente de desposeídos y marginados, centenares de miles de trabajadores informales sometidos a una brutal sobreexplotación y negación de los más elementales derechos, amplios sectores sociales que poseían superiores condiciones materiales que el proletariado, todos ellos inmersos en un deshumanizado proceso de fusión y descomposición de las denominadas clases subalternas.

No será posible avanzar en nuestro objetivo histórico, la Revolución Democrática, si no logramos niveles mayores de organización y presencia de masas. Hay una directa relación entre los objetivos estratégicos del periodo y el Partido que necesitamos. Este debe ser un Partido convencido, activo y unido, parte integrante y decisiva de los procesos sociales en curso, para implementar a fondo nuestra política sin titubeos e inhibiciones.

Como dijimos en el 15^o Pleno del Comité Central, la cuestión central es que nos falta mucho más para ser un Partido de masas. Para avanzar en esa perspectiva, no basta con fortalecer las células, debemos descubrir soluciones nuevas y audaces, a partir de nuestra experiencia. Necesitamos un Partido unitario, que destierre el sectarismo, vinculado a la lucha social, al proceso de organización popular, inmerso en los problemas de la gente, elaborando plataformas locales, luchando por avanzar hoy en la solución de los problemas, recorriendo permanentemente las poblaciones y conversando con la gente. Un Partido más grande, con mayor presencia en los trabajadores, la juventud, las mujeres, los pobladores.

Incidir y aportar sustantivamente en la dirección política del movimiento de masas implica acentos en su estructura orgánica y en su calidad política, tanto de sus cuadros como de su inserción en el movimiento. Entre teoría y práctica revolucionaria, está la mediación de la organización política revolucionaria.

Necesitamos un Partido que desarrolle la discusión franca, honesta y constructiva, en un clima de fraternidad, desarrollando el intelectual colectivo y asumiendo plenamente la unidad de acción y el centralismo democrático. Los mayores esfuerzos debemos dirigirlos hacia la base partidaria, allí es donde en primer lugar debe llegar fluidamente la información para discutir políticamente y apropiarse de la línea.

Esto mismo nos hace mirar más concentradamente la educación política, el debate de ideas y la lucha ideológica. La comunicación y la propaganda de masas son una forma privilegiada de dirección política. Valoramos el aporte creciente que han hecho los medios de comunicación del Partido, El Siglo, la cadena nacional de Radio Nuevo Mundo, Pluma y Pincel, y el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz. Pero requerimos nuevos dispositivos políticos, ideológicos y culturales, y mayor decisión al interior del partido y en su trabajo de masas para librar esta batalla.

En el 2006 se cumplen treinta años de la detención y desaparición de dos direcciones del Partido y una de las Juventudes Comunistas. Se cumplen también veinte años del Paro Nacional del 2 y 3 de Julio realizado contra la dictadura de Pinochet, que fue hito fundamental para el fin de la dictadura.

Llamamos a desarrollar un gran movimiento por un Bicentenario Popular, que se contraponga al exitista Bicentenario oficial que diseñó el gobierno de Lagos para mostrar un inexistente ejemplo de país moderno y democrático en el afán de regresar al gobierno. Referencias para este movimiento serán los aniversarios de los hitos históricos del Centenario del movimiento obrero y popular que hemos comenzado a transitar, como el Centenario de la FECH este año, los 130 años del natalicio de Luis Emilio Recabarren el 6 de Julio, el Centenario de la masacre de la Escuela Santa María el 21 de Diciembre de 2007, el Centenario de Salvador Allende el 2008. Todo ello debe ser parte de la reafirmación de la identidad comunista.

Desde Luis Emilio Recabarren, este grueso árbol de hojas siempre verdes camina por la historia del Pueblo de Chile. Y lo seguirá haciendo siempre. Como lo ha hecho en este tiempo que nos tocó vivir un acontecimiento sumamente doloroso: la enfermedad y la muerte de nuestra querida compañera Gladys Marín, que sin embargo se transformó en un hecho político que conmocionó al país y que generó múltiples y diversas expresiones de solidaridad de amplios sectores de Chile y el mundo, que en muchos casos expresaron un reconocimiento hacia el rol jugado por los comunistas en la lucha popular.

Al actual Comité Central le correspondió la enorme responsabilidad de asumir la Dirección del Partido sin la presencia de nuestra querida Gladys, que fue elegida Presidenta del Partido en el XXII Congreso. Ella jugó un papel determinante en los lineamientos de nuestra política hasta en los últimos momentos de su vida. Su ejemplo debe ser el símbolo de este esfuerzo que nos toca enfrentar en este tiempo de construcción y esperanza.

Con su legado, avancemos sin demora para hacer despuntar el nuevo amanecer de Chile.

¡CON GLADYS, MIL VECES VENCEREMOS!